



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Demandantes: ANA MARÍA ORTIZ y OTROS
Demandados: MINA SAN JULIÁN VEREDA LAS CAMELIAS S.A.S. y OTROS
Radicado: 05001 31 05 001 2018 00213 01
Decisión: A-170

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra del auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el día 28 de marzo de 2022 mediante el cual se negó el decreto de unas pruebas.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante auto escrito, aprobado previamente por los integrantes de la Sala.

A N T E C E D E N T E S

En el proceso de la referencia, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto del 28 de marzo de 2022, dispuso negar el decreto de algunas de las pruebas solicitadas por la parte actora, como la declaración de parte de los propios demandantes y un oficio dirigido a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, indicando, con relación a la declaración de parte, que como modificación introducida por el Código General del Proceso se puede interpretar, con base en el artículo 196, que tanto la declaración como el interrogatorio tienen funciones distintas, sin que solamente sean útiles para el proceso las afirmaciones negativas, puesto que la declaración impone la interpretación de lo que lo perjudique y lo que lo beneficie. Respecto del oficio, hay dos aspectos esenciales para el proceso y es que, si bien la parte demandada no reconoce la existencia de la relación laboral, lo cierto es que existió la muerte del señor ANGELO dentro de la Mina, por lo que era su obligación elevar la solicitud de investigación a la Secretaría de Minas. Además, se solicitó, de haber iniciado la investigación, que informara si se impusieron sanciones y correctivos, lo que resulta importante para el litigio.

El Juzgado no repuso la decisión y concedió el recurso de apelación que de manera subsidiaria se había presentado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término del traslado para alegar, los apoderados de las partes no realizaron pronunciamiento alguno.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Según el recurso de apelación presentado por el apoderado de los demandantes, lo que se cuestiona es la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín de negar el decreto de la prueba de declaración de parte y un oficio solicitado a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. En el primer caso, el fundamento es lo consagrado en el artículo 196 del Código General del Proceso mientras que en el segundo está relacionada con los permisos mineros

otorgados, certificados de operación, información sobre la ocurrencia del accidente, información de la investigación realizada y eventuales sanciones impuestas.

Sin embargo, pese al interés, en abstracto, de las pruebas citadas, su decreto y práctica no siempre ha de ser automática, por cuanto previamente el juez, como supremo director del proceso, debe analizar si aquellos medios probatorios, como cualquiera otro, son conducentes, pertinentes y útiles.

En efecto, el artículo 53 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, dispone: *"El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito."* De otro lado, el artículo 168 del Código General del Proceso establece: *"El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles"*.

De esta manera, la procedencia de una prueba está determinada por la posibilidad de que su práctica esté admitida legalmente (conducencia), que tenga capacidad de lograr el efecto que se espera (pertinencia) y que aporte al proceso (utilidad), con la finalidad, se reitera, de llevar certeza al juez de los hechos que se describen en la acción o en su contestación y su objeto es soportar las pretensiones o las excepciones.

En el caso concreto, la Jueza de primera instancia rechazó las pruebas mencionadas por cuanto consideró, en el primer caso, que la declaración de parte no cumple con las condiciones de pertinencia y utilidad en la medida que la finalidad del interrogatorio a las partes es obtener confesión de la contraria y permitirle que llegue a la audiencia a una declaración a introducir nuevos hechos, es una situación que se torna en extemporánea. En el segundo caso, se estimó simplemente

que no estaban cumplidos los requisitos de pertinencia y utilidad debido a las competencias que tiene la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, que están limitadas a las licencias que conceden para la explotación minera, más no frente a trámites de accidentes de trabajo, sin que tenga injerencia para sanciones o el tipo de trámites cuya información se busca.

1. Declaración de parte.

Para la Sala, el decreto y práctica de la declaración de parte a todos los demandantes no resulta necesaria, conducente ni útil con relación al objeto del litigio y para el pronunciamiento del fallo.

Lo primero que se debe advertir es que con la decisión adoptada en relación con esa prueba no se vulnera derecho fundamental alguno de las partes, ni el equilibrio entre ellas, y por el contrario trata de evitar dar cabida a elementos que no significan ningún provecho al debate, procurando agilidad y rapidez en el trámite procesal.

Según el artículo 165 del Código General del Proceso, son medios de prueba, la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez.

La diferencia sustancial entre la declaración de parte y el testimonio de terceros, gira en torno a que el primero de ellos es un sujeto procesal vinculado al juicio por el interés particular y directo que tiene en el resultado de las pretensiones de tal suerte que lo que se persigue con su declaración es obtener sobre la misma el conocimiento que tengan de los hechos que interesan al proceso, pero como fuente de confesión para formar el conocimiento del juez, mientras que el testimonio de terceros es rendido por quien no es

parte del juicio y en consecuencia frente a él no surte efectos la decisión que en éste se adopta.

Ahora, el inciso final del artículo 191 del mismo código establece con respecto a la declaración de parte lo siguiente: *“La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”*, afirmación respecto de la cual se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencias como la CS 780 del 10 de marzo de 2020, donde se explicó el alcance de la anterior disposición en el siguiente sentido:

“Tanto en el anterior como en el nuevo estatuto procesal el interrogatorio que se hace a las partes se circunscribe a que establezcan el objeto del proceso y fijen el objeto del litigio, para lo cual deberán exponer los hechos operativos que contextualizan el caso, los hechos probatorios susceptibles de confesión y los hechos que requieran ser probados.

Los hechos operativos y los hechos probados podrán ser tenidos en cuenta más adelante para la elaboración de los enunciados facticos porque no dan lugar a discrepancias. De ahí que la simple declaración de parte no es medio de prueba, pues los hechos operativos que de ella se extraen jamás hacen prueba a quien los refiere.

Ese es el significado del inciso final del artículo 191 del Código General del Proceso cuando expresa que «la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas».

Las “reglas generales” de apreciación de las pruebas señalan que la declaración que no entraña confesión sólo puede apreciarse como hecho operativo, dado que no produce consecuencias jurídicas adversas al declarante ni favorece a la parte contraria (numeral 2º del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil; numeral 2º del artículo 191 del Código General del Proceso). Pero tampoco favorece al declarante porque nadie puede sacar ventaja probatoria de su simple afirmación

Como la simple declaración que no comporta confesión no produce prueba a favor ni en contra del declarante o de su contraparte, hay que concluir necesariamente que no es un medio probatorio sino un hecho operativo, dado que no genera controversia, ni hay necesidad de someterla a contradicción; por lo que sólo servirá para contextualizar la situación cuando hayan de elaborarse los enunciados fácticos en la sentencia."

Así las cosas, el interrogatorio de parte en los términos del artículo 191 ya citado es idóneo en la medida en que sirva para provocar confesión, no siendo posible en este sentido practicarse una declaración de tipo testimonial de quien es parte dentro del proceso, en tanto que, de ser así, se estaría permitiendo que una de ellas como lo es en este caso la demandante pueda declarar abiertamente sobre los hechos objeto de debate sin restricción alguna, situación que resultaría notoriamente contradictoria con la finalidad misma del interrogatorio de parte, que como ya se advirtió es provocar la confesión.

Lo anterior ha llevado a algunos autores como Ramiro Bejarano Guzmán a plantear la inadmisibilidad de la prueba, por falta de un correlato literal en las disposiciones del Código:

"Ni por asomo puede decirse que el hecho de haber suprimido la frase "cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria" significa que cada quien puede pedir su propia declaración. Ni en la exposición de motivos del CGP, ni en las actas que reposan en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal de la Comisión que elaboró ese estatuto, se advierte que la tesis de la declaración de la propia parte hubiese sido siquiera discutida. Si no lo fue, menos pudo haber quedado incluida para la vía del silencio o de la supresión de una frase"¹.

¹ <https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/civil-y-familia/la-parte-no-puede-pedir-su-propia-declaracion>

En armonía con lo anterior, es posible concluir que lo que se advierte del contenido del artículo 196 del mismo ordenamiento, es la existencia de pautas al juzgador para la valoración del contenido de la declaración rendida por una de las partes, que eventualmente puede separarse en confesión y mero testimonio, más no la consagración de un medio probatorio independiente que deba ser decretado por solicitud de alguna de las partes.

Finalmente, no se puede olvidar que todos los demandantes serán escuchados en el proceso en virtud del interrogatorio que solicitó cada una de las demandadas, es decir, la MINA SAN JULIÁN VEREDA LAS CAMELIAS S.A.S., MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. y MARÍA NAZARETH FLÓREZ DE RODRÍGUEZ, de modo que no habrá lugar a decretar la prueba en la forma solicitada por el apoderado de los demandantes.

2. Oficio a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

No ocurre lo mismo con el oficio a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, el cual sí puede ser conducente y pertinente en la medida en que la respuesta que se obtenga puede llegar a aportar información relevante o cuando menos ilustrativa para los fines que persigue la parte demandante, lo que además resulta acorde con el contenido de normas como el artículo 165 del Código General del Proceso en la medida que son medios de prueba no sólo los que regula el código sino *“cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”*.

Si bien es cierto, el artículo 26 del CPTSS, modificado por el art. 14 de la Ley 712 de 2001, al regular los anexos que deben acompañarse con la demanda, enuncia en su numeral 3º las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentre en poder del demandante, de donde se sigue que la parte actora bien pudo haber gestionado la

consecución de las pruebas a que se refiere el oficio de marras antes de presentar la demanda, es factible que, igualmente, se trate de documentos que aún no se encuentran en su poder, por lo cual es dable darle la oportunidad para que, antes de dictarse sentencia, procure, a instancias suyas, la documentación deprecada.

Consecuente con lo anterior, en este puntual aspecto son de recibo los argumentos expuestos por el recurrente, razón por la cual será REVOCADO de manera parcial el auto del 28 de marzo de 2022 en cuanto negó el decreto de la prueba de oficio a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia solicitada por la parte demandante, con la salvedad de que su obtención deberá estar a cargo del propio interesado y limitado a la información que se relacionó en el escrito de demanda, quedando con la obligación de allegar la respectiva respuesta ante el Juzgado de conocimiento en un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la notificación de la presente decisión; de lo contrario se entenderá por desistida la prueba.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el día 28 de marzo de 2022 solo en cuanto negó el decreto de la prueba de oficio a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia solicitado por la parte demandante, la cual deberá ser tramitada en los términos dispuestos en la parte motiva de ésta decisión.

En lo demás se CONFIRMA el auto objeto del recurso.

Sin costas en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por ESTADOS y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 123
del 15 de julio de 2022

Consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4ef11a71474ebff5bfe1fa22de5fc3e61034cf5cdbc2f1aa48c47337ec017aa8**
Documento generado en 14/07/2022 11:33:26 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>